

LA TORTURA: UNA REFLEXIÓN*

José Piñera

1. La tortura es un acto abominable. No hay justificación alguna para atentar de esa manera cruel y cobarde contra la dignidad sagrada de la persona humana. Todo torturador viola no sólo el cuerpo, el alma y la mente del prójimo, sino también la ley y los códigos éticos de la civilización occidental.

2. Es evidente que existen relaciones de causalidad entre los eventos históricos. Es un hecho comprobado que la adopción por la izquierda chilena de la vía armada al poder condujo a la violación de la Constitución por el gobierno de Allende, a un estado de guerra civil, al quiebre democrático, al gobierno militar, y a la violencia represiva del estado, incluida la tortura. Por lo tanto, se puede sostener legítimamente que si la izquierda chilena y continental no hubiera despreciado el sistema democrático, no habría habido tortura de origen político en Chile. Eso no es sino razonamiento lógico. La historia no será indulgente, ni siquiera en esta materia, con los que desencadenaron el drama chileno y latinoamericano.

3. Otra cosa muy distinta es intentar atenuar la condena moral a la tortura, como algunos lo han intentado, por haber ocurrido en un “contexto determinado, sea éste “la Guerra Fría”, el combate contra el terrorismo, o incluso la guerra civil. Es verdad que a nivel de enseñanza histórica, se puede confirmar que cada vez que han ocurrido “contextos” violentos y terrorismo ha habido tortura: gobierno británico vs IRA; gobierno español vs ETA; gobierno francés vs resistencia argelina; gobierno norteamericano vs terroristas islámicos, etc., etc. Pero esos “contextos” no son plenamente determinantes, o sea no conducen inevitablemente a la tortura. Entre el contexto y el acto individual, hay una persona con libre albedrío y conciencia, que se puede negar a torturar o a ordenar torturar, que puede resistirse a la presión del grupo enardecido o enceguecido por el odio e incluso las venganzas personales, que puede evitar degradarse él mismo y degradar a su víctima, que, cualesquiera sea su culpa si ella existiere, en ese momento

José Piñera. Ph. D. en Economía, Universidad de Harvard. Fue ministro de Trabajo y Seguridad Social y ministro de Minería. Autor, entre otros libros y publicaciones, de *El Cascabel al Gato*, *La Batalla por la Reforma*, *La Revolución Laboral en Chile*, *Una Casa Dividida*.

*Publicado en www.josepinera.com/pag/pag_tex_tortura_reflexion.lit

está inerte y debe ser tratada de acuerdo a la ley. Por lo tanto, quien tortura no puede apelar “al contexto” para justificar sus abusivos actos.

4. Esta condena inequívoca a la tortura debe estar basada en principios inmovibles y universales. Es un avance meritorio que el Ejército de Chile informe a la ciudadanía que ha emprendido una tarea educativa de sus miembros en el campo del respeto a los derechos humanos, aspirando a que “nunca más”, si ocurrieren dramas similares en el futuro, se caerá en las mismas acciones ilegales. Autoridades militares también habrían señalado que jamás la tortura ha sido parte de una “doctrina” del Ejército, sino un acto de responsabilidad individual de los que la ejercieron, aunque en muchos casos con recursos institucionales. Sin embargo, se habría reconocido que se había entrenado en métodos de tortura a algunos comandos para la eventualidad de la captura de tropas enemigas. Aunque el gobierno ha callado frente a esta revelación, mi postura no sólo es que no se puede torturar a ningún chileno, ni siquiera a aquellos que le declararon la guerra a la democracia, sino que —voy más lejos— no se puede torturar a ningún argentino, peruano o boliviano, ni siquiera en una eventual guerra vecinal. Cuando todos los chilenos aceptemos también esta norma moral, se habrá erradicado definitivamente cualquier apoyo a estos métodos. No es posible compartamentalizar. Si se justifica la tortura en algunos casos o a algunos seres humanos, entonces es débil y frágil la defensa de la vida y la integridad física de todos.

5. Con tristeza y desilusión compruebo que el gobierno Lagos ha escogido en este tema un camino —aquel de las comisiones oficiales— que atenta contra el debido proceso y la justicia. Cualesquiera hayan sido sus intenciones, las que no juzgo, considero que es una fórmula equivocada por, entre otras, las siguientes razones: a) se ha designado discrecionalmente por parte del gobierno de turno una comisión (llamada Comisión Valech por la prensa), la cual nace entonces carente del nivel necesario de independencia de sus mandantes; b) el staff que habría realizado gran parte del trabajo ha demostrado, en declaraciones y entrevistas, un claro sesgo ideológico; c) se han empleado métodos que no tienen valor probatorio, como lo ha destacado incluso Gonzalo Vial Correa, prestigioso historiador que fue miembro designado de las dos comisiones anteriores de derechos humanos, y lo ha reconocido el propio ministro del Interior ante la perspectiva de una avalancha de demandas al Estado; d) se ha introducido una recompensa monetaria a todo quien se declare víctima, hecho agravado por la inexistencia de un proceso judicial que acredite esa condición; e) se mantendrá en

secreto aspectos claves del trabajo de la comisión, desde ya las identidades de víctimas y victimarios, impidiendo toda posibilidad de una revisión crítica; f) se ha permitido que, apenas conocido el informe y con uso de los significativos de medios de comunicación en manos del Estado o sus aliados circunstanciales, altas autoridades de gobierno y de los partidos políticos que lo sustentan iniciaran de inmediato una ofensiva comunicacional contra personas e instituciones claves, incluyendo la prensa y el poder judicial, debilitando de hecho a los contrapesos indispensables del poder; incluso el diario de gobierno, La Nación, injurió en su portada a los máximos dirigentes de los partidos opositores, así como a otras personalidades (incluyendo a Jaime Guzmán asesinado por la extrema izquierda en 1991); y, g) se ha creado, con uso y abuso del canal de televisión del gobierno (TVN), un clima casi histérico de opinión pública en que negar validez al informe oficial significa un oprobio moral, coartándose así de hecho la necesaria libertad de expresión de los ciudadanos.

6. En conclusión, el informe de la “Comisión Valech” carece de legitimidad y rigor, y se ha convertido en un instrumento de propaganda del gobierno. El país desperdició la oportunidad de haber intentado una visión compartida sobre la verdadera extensión y naturaleza de la tortura. Se puede comprobar leyendo la prensa diaria una evidente utilización de un terrible dolor humano con objetivos políticos, provocando así un clima de división y odio en vísperas de una elección presidencial clave, en vez de la proclamada meta de verdad y reconciliación. Todo ello no impide afirmar y reafirmar, como lo he hecho antes y lo hago aquí una vez más, que todo indica que en Chile se cometió el delito de tortura por parte de agentes del Estado y que ella debe ser condenada de manera absoluta para así reducir la posibilidad de que ella vuelva a ocurrir en el futuro.

7. Para atenuar el dolor de las víctimas, limpiar la honra de los falsamente acusados, y buscar la verdad histórica, me parece que existen dos caminos, complementarios que, pese a todo, hay que seguir explorando. El primero, es un debate cívico con altura de miras e intenciones, respetuoso de las motivaciones de todos, y riguroso en su lógica y premisas. Así se podría irá desentrañando las causas profundas que permitieron la tortura, sus consecuencias humanas, sociales y políticas, y proponiendo políticas públicas para que ello nunca más vuelva a suceder. El segundo es el camino de la verdad acreditada de la única manera posible en una sociedad civilizada: por los tribunales de justicia a través de un debido proceso. El tiempo transcurrido significa una dificultad, ya que la inmensa mayoría de estos

actos habría ocurrido en 1973, en los primeros meses tras el quiebre democrático, pero no una imposibilidad. Comprendo el estupor y la indignación de las víctimas ante esta aparente realidad oficial de “tortura sin torturadores”. Si existen casos fundados, el camino correcto son los tribunales de justicia. Me pregunto si el dinero público dedicado a financiar pensiones vitalicias a las auto declaradas víctimas no estaría mejor usado en subsidiar los gastos de este proceso judicial (tanto de acusadores como acusados, ya que la presunción de inocencia inicial rige para todos) y mejorar las normas procesales para que se haga, de una vez por todas, justicia en esta materia. Una vez cerrados los casos judiciales, la sociedad debería ejercer algún grado razonable de clemencia a través del proceso democrático, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.

8. En fin, ésta es mi verdad. Aclaro que la expreso con humildad, ya que estos temas son extraordinariamente complejos, sensibles y delicados. Y la ofrezco consciente de que ella es imperfecta y sujeta a clarificaciones y perfeccionamientos. Pero intuyo que estos son los derroteros de la amistad cívica, el derecho y la caridad.

10 de diciembre, 2004.

Posdata 1. Hoy 3 de Abril, 2005, apareció en el diario El Mercurio la siguiente denuncia del periodista Pablo Carrasco que tiende a confirmar los temores expresados acerca de la falta de rigurosidad del “Informe Valech”.

“ANTOFAGASTA.- Hernán Vargas, director regional de Onemi, concejal de esa ciudad y presidente del Partido Socialista en la Segunda Región figura en el informe Valech como uno de los prisioneros y torturados bajo el número 25.417. Por este motivo recibirá \$112.817 mensuales por parte del Estado, según la Ley 19.992. Sin embargo, La Agrupación de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos niega que él haya sido víctima de torturas. A pesar que en el informe se señala que todas las personas que figuran como víctimas fueron entrevistadas personalmente, Vargas señala que no conoce a nadie de la comisión, y que no fue él quien presentó sus antecedentes, sino que fue hecha por su madre, Elba Canivilo, quien lo tramitó con la presidenta comunal del PS María Inés Cajiao. Hernán Vargas dijo que no tiene ninguna intención de ser eliminado del registro. Como dirigente estudiantil Vargas recuerda que en algunas protestas fue ‘golpeado y humillado’ mientras estuvo detenido dentro de vehículos policiales. Oficialmente, registra tres detenciones, de las cuales ninguna superó las doce horas. Doris Navarro (PC), que preside la Agrupación de Ejecutados y Detenidos

Desaparecidos de Antofagasta, cuenta que inscribía a la gente que iba cayendo presa, y que Vargas nunca figuró. Asegura que vio cuando lo detuvieron, pero que después de sólo algunas horas recuperaba su libertad. En una carta enviada al intendente regional, Jorge Molina, Navarro le solicita que intervenga para eliminarlo del informe. La dirigente dice que es mentira que su inscripción la haya hecho su madre, porque nadie podía testimoniar a nombre de otro. Gerardo Claps fue el encargado de visitar a los presos políticos en su calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la Segunda Región y coincide que nunca vio a Vargas en los centros de reclusión”.

Posdata 2. Hoy 1 de Febrero, 2005, aparece en La Tercera una entrevista a José Benquis, ministro de la Corte Suprema, en la cual expresa lo siguiente: “Francamente quede muy decepcionado con el resultado que arrojó la Comisión Valech, cuyo informe queso convertido en una obra literaria, semejante a las de Stephen King”. □